

# Declaración del Comité Ejecutivo del POSI

---

## Ante el nuevo Estado de Alarma

Incapaces de frenar la expansión incontrolable de la pandemia de COVID-19, los gobiernos autonómicos y el gobierno central se han puesto de acuerdo para declarar un nuevo Estado de Alarma, con nuevas restricciones de movilidad y recortes de derechos y libertades. Y nada menos que para seis meses. Una imposición que muchos desconfían de que sea eficaz contra el virus a falta de otras medidas, pero que va a profundizar gratuitamente la ruina económica y a sumir aún más en la miseria a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que han agotado su ERTE o que se han quedado en paro.

### **No era algo inevitable y había que evitar hacerlo así**

Nos presentan como inevitables los nuevos confinamientos. Puede que ahora lo sean (si fuesen acompañados de otras medidas), pero, desde luego, podrían haberse evitado si durante los 99 días de confinamiento y los primeros meses de la llamada “nueva normalidad”, los gobiernos hubieran tomado las medidas necesarias, como reforzar la Atención Primaria, contratar y formar rastreadores para identificar y aislar los contagios del virus, reforzar el transporte público para que la clase trabajadora no tenga que acudir al trabajo hacinada, adaptar los centros de trabajo para que no se conviertan en lugares de contagio, contratar profesores y construir o adaptar aulas para permitir centros de estudio presenciales y seguros, reforzar y adaptar los centros geriátricos, y demás medidas que hoy hasta un niño puede recitar, pero que no se han puesto en marcha.

Nada de eso se ha hecho. Y ahora, otra vez, los gobiernos dicen que hay que tomar medidas de urgencia, “inevitables”, sin acompañar a medidas sanitarias urgentes. Hace 15 días un decreto-ley imponía medidas de urgencia en la sanidad, que permiten aplicar la movilidad forzosa de médicos y enfermeros, dentro del hospital, o desde Atención Primaria a hospitales de campaña, así como obligar

a médicos a trabajar en una especialidad que no sea la suya o contratar a médicos sin especialidad para que hagan de especialistas. Madrid anuncia un nuevo hospital de 1.000 camas cuyas plazas de médicos y enfermeros se pretenden cubrir quitando personal de otros centros sanitarios, en los que ya escasean. Pero, a pesar de que las plantas de hospitales se llenan y las UCI vuelven a ir por el camino del colapso, no se incluye ninguna medida para garantizar que todos los recursos sanitarios existentes se ponen al servicio de la comunidad, incorporando la sanidad privada a la red pública.

Los contagios masivos vuelven a las residencias de mayores, cuyas instalaciones no han sido adaptadas y que siguen teniendo los ratios de personal absolutamente insuficientes que tenían antes de la pandemia. Y que continúan en manos del negocio privado, con una presencia cada vez mayor de multinacionales y fondos buitres. Tanto en la sanidad como en las residencias, ni una medida que pueda poner en cuestión el sacrosanto negocio de sus propietarios.

Todas las medidas adoptadas buscan preservar los intereses de los patronos y las multinacionales. Se restringen los contactos y se limitan los aforos, salvo en las empresas y en el transporte público, donde la población trabajadora seguirá yendo hacinada.

### **¿De nuevo, medidas restrictivas y represivas?**

Incapaces de poner coto a los contagios aplicando medidas sanitarias, de nuevo vuelven a los confinamientos forzados y las medidas represivas. Ya en el primer Estado de Alarma se impusieron más de un millón de multas aplicando la Ley Mordaza, y desde entonces no se ha cesado de intentar criminalizar a la juventud. Ahora de nuevo, serán policías y guardias civiles, cuando no militares.

Lo que sí sabemos es que se imponen nuevas restricciones al derecho de reunión, y que el

decreto que declara el Estado de Alarma prevé la posibilidad de prohibir manifestaciones por “motivos sanitarios”.

No sabemos si esta vez habrá suficientes EPI, respiradores y reactivos para las pruebas PCR, pero desde luego sí sabemos que la destrucción de la industria ha continuado (Nissan, Alcoa, Alestis, Airbus, y un largo etcétera), ante la pasividad del gobierno Sánchez y de los gobiernos autonómicos. El Gobierno no tiene una política de defensa y promoción del automóvil y de la industria. Y además haría falta una potente industria textil, farmacéutica y de manufactura para poder hacer frente con seguridad a las necesidades.

### **¿Más excusas para aplazar la respuesta a reivindicaciones e incumplir promesas?**

La pandemia se ha convertido en la gran excusa. Oímos a varios ministros decir que “no es el momento” de derogar las contrarreformas laborales, porque “la situación económica no lo permite”, o la Ley Mordaza “el momento no es oportuno” (mientras el ministro Marlaska alaba cada vez que puede la “utilidad” de esa Ley Mordaza que el gobierno del que forma parte se comprometió a derogar).

Tampoco es el momento—dicen—de recuperar los más de 20.000 millones recortados en la Sanidad o de revertir del todo los recortes en la Dependencia. Ni de recuperar los puestos de trabajo perdidos en los servicios públicos. Por el contrario, se mantienen en el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado las tasas de reposición impuestas por el Gobierno Rajoy para limitar la incorporación de empleados públicos. Y los empleados públicos deberán renunciar una vez más a recuperar el poder adquisitivo de sus salarios perdido por los recortes de Zapatero y Rajoy.

Tanto las medidas “de urgencia” que limitan los derechos del personal de la sanidad como las medidas que afectan a los empleados y empleadas públicos se han tomado sin negociación alguna con los sindicatos.

### **Más que nunca, es necesaria la movilización unida**

“Es lo que hay”, nos dicen algunos. “Es inevitable”. “Solo la ultraderecha se opone”, añaden otros. Incluso alguna organización ha saludado la decisión de declarar un nuevo Estado de Alarma sin criticar sus contenidos. Y sin embargo, la resistencia de la población trabajadora se expresa en las movilizaciones del personal sanitario y en las de la población ante sus centros de salud. La última: al anuncio del nuevo hospital ha respondido de inmediato una recogida de firmas de sanitarios que rechazan el traslado y que queden sin cubrir sus plazas, al parecer en un día fueron 2.000 firmas. También hay resistencia en las movilizaciones de enseñantes, que piden a las organizaciones unidad para organizar la lucha, e incluso una huelga general contra Ayuso, como hacen los enseñantes de Vicálvaro. Y las movilizaciones incesantes de los pensionistas. Hay que añadir las movilizaciones en los barrios obreros de Madrid y de otras muchas ciudades, en defensa de los servicios públicos y contra la represión, y las justas protestas en Cataluña de pequeños comerciantes y de los servicios culturales. La clase trabajadora no acepta la “unidad” que pretenden imponernos, y a la que se someten algunos dirigentes.

Y tienen razón. Ni los trabajadores ni sus organizaciones pueden aceptar más sacrificios en nombre de la supuesta lucha contra la pandemia, lucha que se detiene en el umbral del respeto a la propiedad privada, a los beneficios empresariales y a las instituciones podridas del régimen monárquico. Hay que decir, alto y claro, que lo que necesitamos son medidas para salvar la sanidad y la enseñanza públicas, los empleos en la industria, para salvaguardar las conquistas obreras y democráticas. ¡Ninguna “unión sagrada” en defensa de los intereses del capital! ¡Ninguna sumisión a las necesidades de un gobierno que se somete al capital financiero y la Monarquía! ¡Gobierne quien gobierne, las reivindicaciones, los derechos, se defienden!

Debatir cómo poner en práctica esta política debe ser una de las tareas del encuentro que prepara el CATP para el 7 de noviembre.

29 de octubre de 2020



**Comité Ejecutivo del  
Partido Obrero Socialista Internacionalista,  
sección de la IV Internacional en el Estado español**

**[www.posicuarta.org](http://www.posicuarta.org)**